



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEDIDA DE PROTECCIÓN ADOPTADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

I.-OBJETO

El objeto del contrato consiste en el diseño, implementación y evaluación del modelo de trabajo de entornos protectores y de buen trato para niños, niñas y adolescentes en la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid donde residen menores con medida de protección adoptada por la Comunidad de Madrid así como la capacitación de los profesionales de la red en dicho modelo y el establecimiento de los protocolos y procedimientos de dicho modelo adaptados a cada centro, así como el desarrollo de medidas de buen trato y prevención, detección y comunicación de las posibles situaciones de violencia sobre los menores.

El artículo 3 m) de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que **“Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital”**.

El artículo 53 de dicha Ley Orgánica establece en su apartado primero que *“todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la Infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación”*.

En la práctica, se trata de implementar en cada centro el modelo de entornos seguros aplicable a la red de protección de la Comunidad de Madrid, para que puedan ser espacios de buen trato afectivo y se puedan prevenir, identificar y prevenir situaciones de violencia, abuso o explotación para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) a su desarrollo pleno y a la protección y para cualquier iniciativa que quiera desarrollarse desde un enfoque de derechos humanos y del interés superior del menor, concretándose en los siguientes descriptores:

- ✓ Un espacio consciente de los riesgos reales y potenciales y sobre los que se interviene de manera efectiva para facilitar que los NNA puedan participar, desarrollarse y crecer, vivir y convivir en contextos libres de violencia.
- ✓ Construido desde el enfoque de derechos y basado en dar respuesta a las necesidades reales de los menores participantes, asumiendo la diversidad en todas sus dimensiones.
- ✓ Espacio donde todos los agentes implicados sean conscientes de su labor y compromiso con la protección real y el cuidado mutuo y en el que se garanticen los derechos de los NNA.
- ✓ Entorno en el que se previene de forma eficaz, detecta, notifica y actúa ante cualquier situación real o potencial que pueda suponer un riesgo para la integridad física, psicológica, emocional o social de las personas.
- ✓ Entorno que evalúa y actualiza el análisis de los riesgos internos y externos y diseña medidas de prevención, erradicación, neutralización y/o reducción de los mismos.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1295393236303151034665**

- ✓ Espacio que promueva un contexto de protección, potenciando la dignidad de las personas y empoderándolas a través del buen trato y que asume el rol de dinamizador de estrategias de prevención basadas en la comunidad, implicando a todo el contexto en su misión protectora.

En definitiva, se pretende avanzar en el desarrollo de una cultura de protección y buen trato a través de la revisión de los procesos, procedimientos, estructuras y sistema de planificación para orientar su funcionamiento hacia una protección de los niños, niñas y adolescentes, basado en estrategias de buen trato y cuidado mutuo.

II.- OBJETIVOS

- Promover la cultura de la protección y la promoción del buen trato a niños, niñas, adolescentes (en adelante, NNA) en la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid
- Desarrollar un modelo de entorno protector en los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, de implementación eficaz y eficiente en los centros, implicando a todos los agentes internos y externos que se ocupan de la protección de los NNA.
- Prevenir y detectar cualquier modalidad de violencia contra los menores de edad, especialmente la ejercida a través de las redes sociales (cyberbullying, sexting, grooming, sextorsion, etc).
- Garantizar el derecho de los NNA a desarrollarse integralmente en contextos libres de violencia.
- Promover un espacio en el que los NNA puedan trabajar la participación como derecho y responsabilidad.
- Promover una cultura centrada en la educación para la paz y la convivencia, la ayuda mutua, el respeto y la empatía.
- Formar a los equipos profesionales en estrategias de buen trato y prevención, detección y notificación de la violencia a través de los recursos disponibles.

III.- PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

- Interés superior del menor.** “Primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo concurrente, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Niño” (art 3. La ley 6/95, de 28 de marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid).
- Enfoque de Derechos del Niño en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.
- Integración de los menores en los recursos del entorno (escolares, culturales, asociativos, de salud, etcétera) y promoción de su participación en los distintos grupos sociales, salvo que fuera contrario a su interés.
- Normalización del menor en la vida cotidiana, entendida como la organización del centro, de modo que proporcione a los menores unas experiencias similares en lo fundamental a las de cualquier menor de nuestra sociedad.



- e) Individualización de la atención en función de las necesidades y características de cada uno.
- f) No discriminación de cualquier hecho individual o social, respeto por la raza, religión, cultura, ideología y cualquier otra circunstancia.
- g) Coeducación, entendida como un intento de educar para la igualdad, en el que se elimina cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, tanto en los roles como en las prácticas sexistas. Se trata de fomentar el respeto y el trato igualitario de ambos sexos.
- h) Estabilidad y coherencia en el marco de las relaciones del menor, tanto con adultos como con iguales.
- i) Capacitación y participación de los menores en su propio proceso educativo, en la toma de decisiones y en las medidas que les afecten.
- j) Atención multiprofesional y coordinada por parte de los equipos responsables de los recursos residenciales.
- k) Coordinación con el resto de recursos de protección social y jurídica de la infancia, que garantice el carácter colegiado e interdisciplinar de las actuaciones.

IV.- METODOLOGÍA

El proyecto se sustentará en una metodología participativa que incluya revisión documental, técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, grupos focales e implantación de un modelo que sirva de base para toda la red de centros de protección y sobre el cual, cada centro pueda establecer sus propios protocolos adaptados a las características

Durante el año 2021 la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y en el seno del Consejo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, ha constituido una Comisión Permanente de Coordinación contra la Violencia a la Infancia y a la Adolescencia, en los que se han puesto en marcha distintos grupos de trabajo específicos para abordar protocolos, coordinación y derivación para una atención integral a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia infantil, en consonancia con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En relación con los centros de protección de menores, se ha constituido un grupo específico de trabajo sobre los centros de protección como entornos protectores, como respuesta por un lado a la demanda expresada por parte de los diferentes profesionales implicados en la atención a menores pertenecientes al sistema de protección y en relación a los casos de menores víctimas de violencia así como para dar respuesta a las previsiones contenidas en la Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ha venido trabajando desde el mes de marzo de 2021 para articular las bases de este desarrollo, habiendo trabajado en la aprobación de una primera versión del modelo de sistema de protección interno de la red de centros de protección basado en el buen trato y el cuidado mutuo y en el estudio de casos de varios centros de protección.



Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado hasta el momento, el trabajo a desarrollar se realizará en las siguientes fases:

1. FASE DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO:

Se revisará la documentación analizada en el grupo de trabajo hasta el momento de ejecución del actual contrato y se estudiará la situación de los menores acogidos en acogimiento residencial, así como la situación de los centros de protección de la Comunidad de Madrid, desarrollando para ello, el análisis cuantitativo y cualitativo necesario que conduzca a la implementación del modelo en la red de centros.

Complementariamente se determinarán las posibles necesidades de capacitación, formación y/o mejora continua que los centros de acogida pueden tener en relación a las herramientas básicas cuya implementación garantiza la construcción de entornos protectores basados en el buen trato y el cuidado mutuo.

Se realizarán entrevistas, preferentemente semiestructuradas, que se realizarán con actores clave (en formato presencial u on line) como expertos y profesionales de los centros (educadores, psicólogos, entre otros), y personal dependiente de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

Se elaborará un plan de implementación y seguimiento, así como los documentos necesarios de desarrollo del modelo del sistema de protección para toda la red de centros de protección que contenga los siguientes elementos

- Marco normativo de referencia
- Evaluación inicial de las medidas de buen trato
- Mapa de Riesgos para identificar y dar respuesta a los diferentes riesgos de violencia que podrían aparecer en cada entorno cotidiano y que podrá ser objeto de actualizaciones periódicas.
- Código de conducta de los profesionales, familias y menores
- Revisión de documentos, protocolos y procedimientos adaptados al Modelo
- Designación de responsables
- Guía de políticas de personal (selección de personal, implicación del personal etc)
- Protocolo de actuación en casos de violencia (artículo 53 de la Ley Orgánica 8/2021)
- Programa de capacitación
- Plan de comunicación
- Manual de procedimientos de gestión
- Plan de evaluación y mejora continua

En el proceso de construcción se recurrirá a los estándares internacionales (Naciones Unidas, Keeping Children Safe y estándares de Calidad en Acogimiento Residencial (EQUAR), entre otros).

Esta fase durará un tiempo estimado de 6 meses e implicará un compromiso institucional efectivo con las políticas relativas a la prevención, detección y respuesta en situaciones de violencia.

2ª FASE: IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN.

Se elaborará un **Manual de Modelo de Entorno Protector** en los centros de protección de menores en la Comunidad de Madrid, que conllevará los siguientes elementos:

- ✓ Marco normativo de referencia
- ✓ Mapa de riesgos



- ✓ Elaboración de un Código de Conducta adaptado a las circunstancias de los usuarios en régimen de acogimiento residencial.
- ✓ Guía de políticas de personal (selección de candidatos, implicación de empleado etc)
- ✓ Estrategia para la implantación del Modelo en la red interna y externa de los centros de protección.
- ✓ Elaboración de Protocolos de actuación en casos de violencia y/o trato inadecuado, en los términos del artículo 53 de la Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- ✓ Planificación de las modificaciones de normativa interna y protocolos de los centros de protección que resulten necesarios
- ✓ Plan de Comunicación interna y externa.
- ✓ Manual de prácticas y procedimientos para la gestión del modelo de entorno protector

Esta fase durará un tiempo estimado de 4 meses.

Esta etapa implicará un compromiso institucional efectivo con las políticas relativas a la prevención, detección y respuesta en situaciones de violencia.

3ª FASE: IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE ENTORNO PROTECTOR EN LA RED DE CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En esta etapa se pretende que el Modelo de Entorno Protector se implante en la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid adaptándose a las particularidades de cada centro y sus características y contexto interno y externo.

Par ello, se deberán planificar las acciones correspondientes para que a la finalización de los trabajos todos los centros de protección hayan implantado el Modelo, adaptándose mediante las actuaciones y documentos que resulten necesarios.

Trimestralmente, se mantendrá una sesión de evaluación con la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, a fin de recibir reflexiones, críticas y sugerencias, actualizándose la documentación trabajada y adaptando en su caso, las medidas de protección necesarias.

Esta fase durará 14 meses, si bien podrá desarrollarse en las anteriores fases con los centros de protección que determine la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, por contar con experiencias en este ámbito.

El último mes, antes de la finalización del contrato, se entregará al responsable del contrato de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, un informe con el desarrollo de los trabajos y la implantación realizada.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

A lo largo de todas las fases del desarrollo del proyecto, se impartirá formación al equipo profesional de los centros de protección sobre estrategias de buen trato y prevención, detección y notificación de la violencia a través de los recursos disponibles y cuyo contenido versará sobre las siguientes cuestiones:

- Modelo de entorno protector y de buen trato de la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid.



- Consecuencias en el desarrollo de la personalidad infantil y adolescente de la exposición a situaciones de maltrato.
- Prevención, detección y reparación de situaciones de violencia ambiental en cualquiera de sus formas.
- La resiliencia para prevenir y tratar las consecuencias del maltrato y la violencia hacia los niños y adolescentes.
- El buen trato como inductor de resiliencia infantil. El educador como tutor de resiliencia.
- Elaboración de protocolos para garantizar que las residencias infantiles de protección sean espacios seguros para la infancia y la adolescencia protegida.

VI.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA O ENTIDAD ADJUDICATARIA.

Llevar a cabo todas las siguientes acciones:

- ✓ Participación en el grupo de trabajo de entornos protectores, ejerciendo la coordinación conjuntamente con la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.
- ✓ Organizar, dinamizar y convocar a los agentes implicados en el proyecto a todas las reuniones necesarias.
- ✓ Diseño, edición y en su caso reprografía de los documentos, e instrumentos necesarios para todas las fases del proyecto constructivo.
- ✓ Recogida, tratamiento y análisis de la información recogida a través de las fuentes primarias y secundarias definidas en el proyecto. Elaboración de una propuesta concreta sobre entornos protectores que recoja las aportaciones consensuadas de los agentes implicados y que indique de forma clara las acciones a llevar a cabo, su temporalización y recursos asignados.
- ✓ Difundir todas las etapas de la elaboración de la propuesta técnica, realizando una difusión continuada de los resultados y una devolución permanente de los mismos a los agentes implicados.
- ✓ Elaboración de documentos de diagnóstico y cuantas tareas o gestiones surjan durante la elaboración de la propuesta técnica.
- ✓ Implantación del modelo de entorno protector en la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid
- ✓ Realizar la evaluación de todas las acciones, objeto del contrato, llevadas a cabo y entregar una memoria final de las mismas, incluyendo un resumen de los programas de trabajo, un análisis de la participación de los agentes implicados, así como elaborando unas conclusiones y consideraciones de interés.

VII.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE DEBERÁ APORTAR EL ADJUDICATARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

A. MEDIOS MATERIALES

La entidad adjudicataria aportará la totalidad de los medios y materiales necesarios para facilitar una atención adaptada a las condiciones del servicio, entre los que se encuentre un local, material informático, telefónico, etc. adecuados para el desarrollo de sus funciones.



B. MEDIOS PERSONALES

La empresa o entidad adjudicataria dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del Pliego, requiriéndose para toda la vigencia del contrato un Equipo Técnico compuesto por los siguientes perfiles:

Coordinador del Contrato:

- Titulación universitaria relacionada con el ámbito socioeducativo (Magisterio, Educación Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Trabajo Social, Humanidades, Sociología., etc.), con experiencia profesional superior a 4 años en las labores del objeto del contrato.
- Máster universitario o Postgrado en materias relacionadas con la intervención social.
- Experiencia acreditada mínima de 4 años en programas de protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia.

Técnico senior de Gestión

- Titulación universitaria relacionada con el ámbito socioeducativo (Magisterio, Educación Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Trabajo Social, Humanidades, Sociología., etc.), con experiencia profesional superior a 2 años en las labores del objeto del contrato.
- Experiencia acreditada mínima de un año en la ejecución de Programas relacionados con la protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia.

Técnico junior de Gestión

- Titulación universitaria relacionada con el ámbito socioeducativo (Magisterio, Educación Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Trabajo Social, Humanidades, Sociología., etc.), sin que sea necesaria experiencia específica.

Además, el equipo será apoyado por un/a administrativo/a, que dispondrá de título de ciclo formativo de grado superior, formación académica equivalente relacionada con su actividad, o experiencia contrastada en el desempeño de labores de administración y/o contabilidad con experiencia en el manejo de aplicaciones ofimáticas.

La acreditación de los perfiles mínimos necesarios para poder ejecutar el servicio se hará mediante la presentación de currículum vitae firmado por el/la técnico/a propuesto/a, copia de los contratos de trabajo, los títulos y certificados que acrediten la formación y experiencia profesional del personal técnico propuesto, de los que se deduzca que la persona propuesta por perfil profesional acredita los criterios anteriormente expuestos.

La empresa adjudicataria es responsable de garantizar que el personal propuesto para el desarrollo del trabajo dispone de los conocimientos y experiencia requeridos en la presente licitación. En el caso en que se pretendiera sustituir algún miembro de los profesionales propuestos, deberá comunicarlo al responsable del contrato con al menos quince días de antelación a los efectos de comprobar su solvencia profesional.

El personal que preste servicio en el cumplimiento de este contrato, dependerá laboralmente o bajo otro régimen de la empresa o entidad que resulte adjudicataria, que asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo, y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, estará obligada a pagar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, al



cumplimiento del convenio colectivo aplicable y a las restantes responsabilidades derivadas de la legislación laboral vigente, como la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador, quedando la Administración libre de toda responsabilidad. No obstante, ésta podrá exigir en cualquier momento a la Entidad Adjudicataria que acredite el debido cumplimiento de dichas obligaciones.

Dado que el contrato implica el contacto habitual con menores, se exigirá y comprobará durante toda la vigencia del contrato, que todo el personal adscrito a la prestación del servicio cumple el requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, relativo a no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, el citado personal deberá acreditar esta circunstancia mediante una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.

Asimismo, el contratista queda obligado a la acreditación de que dicho personal cumple esta obligación y a la inmediata sustitución de aquellos empleados/as que puedan quedar afectos de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación.

Todo el personal adscrito deberá actuar de manera respetuosa con los menores y sus familiares o tutores. Asimismo, deberán velar por el buen orden y seguridad de los menores que custodian y evitar las conductas agresivas, violentas o irrespetuosas.

Con carácter general, la prestación del servicio se efectuará en dependencias o instalaciones propias del contratista y solo excepcionalmente en la sede del órgano contratante. En este caso, se identificará debidamente al personal de la empresa contratista.

De acuerdo con el artículo 308.2 de la LCSP a la extinción del presente contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

VIII.- COORDINACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Al objeto de realizar la evaluación de la intervención desarrollada por la entidad adjudicataria, así como la supervisión de las condiciones y particularidades técnicas establecidas en el presente contrato, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad llevará a cabo, a través de sus técnicos, un seguimiento continuo del mismo, siendo el/la responsable del contrato la Subdirectora de Protección a la Infancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la LCSP.

A su vez, y con el objeto de facilitar la comunicación entre las partes, la empresa o entidad adjudicataria, deberá designar a un/a coordinador/a del contrato perteneciente a su plantilla, que actuará como interlocutor/a único/a y directo/a con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y que asegurará la calidad del servicio prestado, realizando, labores de coordinación con la DGIFFN, vigilando, en todo momento, el desarrollo de los trabajos, resolviendo los problemas que se planteen en la ejecución del servicio y garantizando el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en este pliego.



Cualquier comunicación que deba mantener el equipo profesional del servicio con la DGIFFN, habrá de hacerse a través de este/a coordinador/a del contrato, que canalizará la comunicación entre la empresa o entidad adjudicataria, el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la DGIFFN, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

De la misma forma, será responsable de controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo, de distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirle directamente las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias, supervisando el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo profesional de las funciones encomendadas, del cumplimiento de las normas laborales de su empresa o entidad así como de la organización de las vacaciones y de las ausencias puntuales, de manera que el servicio a prestar no se vea afectado de forma relevante. Todo ello, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación, y especialmente, al responsable del contrato nombrado por la Administración, en relación con la ejecución de los contratos o la necesaria coordinación para la prestación integral del servicio.

En esta línea, la empresa o entidad adjudicataria habrá de mantener de forma periódica reuniones con los responsables técnicos de la DGIFFN para informar de la gestión llevada a cabo y, en consecuencia, habrá de sujetarse siempre a las directrices e indicaciones que, por conveniencia del servicio y para su adecuada optimización y funcionamiento, se establezcan desde esta Dirección General. En estas reuniones participará el Director o Coordinador técnico del proyecto.

El personal técnico designado por la DGIFFN podrá, en cualquier momento, inspeccionar los trabajos y solicitar cuanta información se requiera sobre el proceso de implementación.

Con la finalidad de contribuir a una mejora en la calidad de las actuaciones, la empresa o entidad adjudicataria presentará un informe a la finalización de cada una de las fases descritas en este pliego, un informe anual y un informe final de resultados, para lo cual se diseñarán los instrumentos técnicos necesarios y se determinarán los indicadores de evaluación correspondientes. Cada informe se presentará en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de cada fase y la memoria anual deberá presentarse, en formato digital, como muy tarde, hasta el día 31 de enero del año siguiente, salvo la correspondiente al año de finalización del contrato, cuya presentación coincidirá con el último día de vigencia del mismo.

En la elaboración de los informes, se deberán seguir las directrices que se establezcan desde la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, en cuanto a su estructura y al conjunto de datos o información que deberá incluir.

En cualquier momento y a requerimiento de los responsables técnicos de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, la Entidad Adjudicataria estará obligada a presentar cuantos datos estadísticos o sobre el proceso de intervención de las personas usuarias que se le soliciten.

Asimismo, estará sometida a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

En la prestación del servicio, la Entidad Adjudicataria garantizará el pleno cumplimiento del principio de “no causar daño significativo” (Principio “do not significant harm – DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero



de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases de ejecución del proyecto.

A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad con lo establecido el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento financiero»), la Entidad Adjudicataria, como perceptor final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberá conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años desde que se abonara el saldo de la operación financiera.

Para garantizar la constancia de estas obligaciones, la Entidad Adjudicataria deberá suscribir la “Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)”, que figura como Anexo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En dicha Declaración deberá comprometerse por escrito a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar investigaciones, entre otras cosas inspecciones y controles in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como garantizar que los terceros implicados en la ejecución de fondos de la Unión Europea concedan derechos equivalentes.

A su vez, la Entidad Adjudicataria está obligada a suscribir el “Compromiso de cumplimiento de principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)” que figura como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Al presente contrato le será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se estará igualmente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021; y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

IX.- COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA Y TITULARIDAD DE LOS TRABAJOS.

La publicidad referida al Programa objeto del contrato deberá encontrarse debidamente identificada de conformidad con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad se determine por la normativa interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, quedando obligada la Entidad Adjudicataria a hacer mención en la misma del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad y a hacer constar la identidad gráfica de la Comunidad de Madrid, así como la correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento de financiación Next Generation que se estipule, debiendo cumplir con las obligaciones de información y publicidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.



A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:

- El emblema de la Unión Europea.
- Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
- Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. También se pueden consultar las siguientes páginas web: <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual> y descargar distintos ejemplos del emblema en https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
- Se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. A tal efecto se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del PRTR.

Todos los informes y materiales elaborados en el ámbito de desarrollo del servicio serán propiedad de la Comunidad de Madrid y deberán estar a disposición de la misma, pudiendo ejercer sobre los mismos el derecho de explotación, que comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación, publicación y transformación.

La entidad adjudicataria no podrá realizar ninguna actividad de comunicación o difusión del objeto del contrato ni emplear la imagen corporativa de la Comunidad de Madrid, sin previo conocimiento y consentimiento expreso del responsable del contrato.

Tampoco podrá utilizar con fines de publicidad o de marketing las imágenes de los menores, sin autorización de la Comunidad de Madrid, a través de la Comisión de Tutela del Menor.

Cuando el equipo técnico de la Entidad Adjudicataria, encargado de la atención, elabore alguna publicación, como artículos en revistas científicas, o participen con ponencias o comunicaciones en seminarios, congresos o jornadas en los que se traten temas relacionados con la atención prestada o con las actividades desarrolladas en el mismo, habrá de solicitarse la oportuna autorización a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a través de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, y, en todo caso, guardar el debido sigilo y confidencialidad con respecto a los datos personales de los usuarios del servicio.

En Madrid a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA
Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

